Area de Acción Jurídica

**CARTILLA RELATIVA A LA
LEY ANTITERRORISTA
1991**

FCCHP
-0369

Copia 1

**comisión chilena de
derechos humanos**

LA LEY ANTITERRORISTA DESPUES DE LAS LEYES CUMPLIDO

I.- COMPETENCIA EN CAUSAS SOBRE DELITOS TERRORISTAS:

- 1.- En virtud de la modificación que experimentó el Art. 5° N°1 del Código de Justicia Militar, las causas que versen sobre delitos terroristas son siempre de la competencia de los tribunales ordinarios cuando los sujetos activos del delito sean civiles; la modificación de competencia torna irrelevante la calidad de militar o miembro del Cuerpo de Carabineros que, eventualmente pueda tener el sujeto pasivo del delito.
- 2.- Para la determinación del Tribunal Ordinario competente, habrá de estarse a las reglas de competencia establecidas en el Art. 10 de la Ley 18.314. Así, en los procesos que se inicien de oficio por los tribunales de justicia o por denuncia o querrela, de acuerdo con las normas generales, es tribunal competente el Juez del Crimen correspondiente, según las reglas de la competencia absoluta, que en materia criminal establece el Código Orgánico de Tribunales. Si el proceso es iniciado en virtud de requerimiento o denuncia del Ministerio del Interior, de los Intendentes Regionales, de los Gobernadores Provinciales y de los Comandantes de Guarnición, el tribunal competente es un Ministro de la Corte de Apelaciones respectiva.
- 3.- Excepcionalmente, pueden los delitos terroristas ser de la competencia de los tribunales militares. Será ese el caso cuando el o los sujetos activos sean militares o miembros del Cuerpo de Carabineros o éstos y civiles, como efecto, de la calificación como delitos comunes, que de los delitos terroristas hace el Art. 9° de la Constitución Política, y de la aplicación de la norma de competencia absoluta contenida en el Art. 5° N°3 del Código de Justicia Militar.

II.- PROCEDIMIENTO EN CAUSAS SOBRE DELITOS TERRORISTAS.

El procedimiento en las causas sobre delitos terroristas será:

- a) El establecido en el Libro II del Código de Procedimiento Penal, en los casos en que el proceso se inicie de oficio por los tribunales de justicia, o por denuncia o querrela;
- b) El procedimiento será el establecido en el Título 6° de la Ley 12.927, sobre Seguridad del Estado, con la sola excepción de lo señalado en la letra ñ de su Art. 27, en el caso de que el proceso se inicie por requerimiento o denuncia de algunas de las autoridades mencionadas en el Art. 10° inciso 2° de la Ley 18.314;
- c) El procedimiento será el establecido en el Libro II Título 1°, 2° y 3° del Código de Justicia Militar, en las causas sobre delito terrorista que, en virtud de lo establecido en el Art. 5° N°3 del mismo cuerpo legal, sean de la competencia de los tribunales militares.

III.- TRIBUNAL COMPETENTE PARA RECALIFICAR HECHOS CONSTITUTIVOS DE DELITO TERRORISTA SEGUN LA LEY 18.314, NO MODIFICADA.

La Ley 19.027 introduce importantes modificaciones al concepto de delito terrorista, y utiliza una metodología diversa para los efectos de establecer las figuras delictivas terroristas. Por dicha razón, es posible que, hechos hasta ahora constitutivos de delito terrorista, encuadrados que sean en las figuras delictivas de los nuevos artículos 1° y 2°, introducidos por la Ley 19.027, no sean constitutivos de delito terrorista.

La necesaria recalificación de los hechos, motivo de la causa, corresponderá al nuevo tribunal que, merced a las modificaciones de la competencia, resulte en definitiva facultado para conocer y fallar las causas sobre delitos terroristas.

La aseveración precedente encuentra su fundamento en los artículos 7° de la Constitución Política y 108 del Código Orgánico de Tribunales.

IV.- APLICACION DE LAS PENAS.

Los delitos considerados en los N° 1 y 3 del artículo 2° de la Ley 19.027 son sancionados con las penas previstas para ellos, sea en el Código Penal, sea en la Ley 12.927, aumentadas en 1, 2 o 3 grados.

Los delitos contemplados en los N° 2 y 4 del artículo 2°, y el de Asociación Ilícita previsto en la nueva Ley, son sancionados en la forma establecida en el artículo 3° de la misma.

Resulta de interés destacar la excepción que, respecto de la tentativa, en relación a las reglas generales de aplicación de las penas establecidas en el Código Penal, introduce la Ley 19.027. Así, contrariamente a lo previsto en el artículo 52 inciso 1° del Código Penal, la tentativa de comisión de un delito terrorista es sancionada por ella con la pena mínima asignada por la ley al delito de que se trata. En el caso de que la pena conste de un sólo grado, corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 67 del Código Penal e imponer a la tentativa el mínimo de ella.

Además, la nueva Ley sanciona la amenaza seria y verosímil de la comisión de un delito terrorista, de igual manera que la tentativa del mismo.

La nueva Ley ya no sanciona la proposición, pero sanciona la conspiración respecto de los delitos que contempla, con la pena correspondiente al delito consumado rebajada en 1 o 2 grados.

V. COMPETENCIA Y TRASPASO

1.- Modificación artículo 5° del Código de Justicia Militar.

- a) Suprime competencia de la Justicia Militar para conocer de delitos de la Ley 18.314 sobre conductas terroristas cuando los inculcados fueren civiles.
- b) Suprime la competencia de la Justicia Militar para conocer de los delitos de ofensas, amenazas o injurias a las Fuerzas Armadas y Carabineros (arts. 284° y 417° del Código de Justicia Militar).
- c) Suprime la competencia de la Justicia Militar para los delitos previstos en el art. 9°, 11° y 14° A de la Ley 17.798 sobre Control de Armas, esto es, tenencia y porte ilegal de las

armas contempladas en el art. 2° a), b) y c) de dicha Ley (armas de fuego, municiones, explosivos, sustancias químicas).

Se mantiene la competencia de la Justicia Militar para los delitos militares previstos en el Código de Justicia Militar independientemente de que sean civiles o militares los inculcados. Se mantiene en consecuencia, en los restantes delitos de la Ley de Control de Armas (arts. 8°, 10°, 13°, 14° y otros).

2.- Artículos Transitorios

- a) Se refiere a los delitos previstos en las Leyes 12.927, arts. 8°, 9°, 10°, 13° y 14° de la Ley 17.798; 282°, 282° bis y 283° del Código de Justicia Militar; 370° N°3 del Código de Justicia Militar 416° y 416° bis del Código de Justicia Militar (delitos contra la Ley de Seguridad del Estado, grupos armados de combate, tenencia ilegal de armas cortas, internación ilegal de armas prohibidas, ultraje al Ejército, atentados contra las Fuerzas Armadas; uso de pasaporte falso, maltrato de obra a Carabineros). Los procesados por estos delitos cuyo sumario se prolongare por más de un año en la Justicia Militar, deben ser traspasados a un Ministro de Corte de Apelaciones, designados por la Corte Suprema.
- b) Plazos para traspasos de estos procesos. Cinco días en caso de reos presos, y treinta días en reos en libertad provisional bajo fianza; ampliables por igual término por una sola vez con la autorización del Tribunal Superior. Este traspaso debe efectuarse de oficio o a petición de parte.
- c) El Ministro deberá cerrar el sumario en el plazo de 45 días prorrogables por igual período autorizado por la Corte Suprema.
- d) Si los procesos se encontraren en estado de plenario ante la Justicia Militar al publicarse la Ley, el Juez Militar tendrá un plazo de 30 días prorrogables por 15 días a petición del procesado. Si no lo hace, también deberá traspasarse a un Ministro de Corte de Apelaciones.
- e) De acuerdo al art. 1° transitorio de la Ley, las causas que se encontraren con sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado Militar y pendiente su conocimiento en la Corte Marcial, deben ser traspasadas a las Cortes de Apelaciones respectivas para sentencia de 2a Instancia en los casos de la Ley 18.314, arts. 284°, 417° del Código de Justicia Militar y en general, los delitos que de acuerdo con esta Ley, deben ser de competencia de la Justicia ordinaria.

VI. LIBERTAD PROVISIONAL, PRUEBA Y PROSECUCION DE LA TRAMITACION.

SOBRE LA TRAMITACION DE LOS PROCESOS UNA VEZ RADICADOS EN LOS TRIBUNALES ORDINARIOS.

1.- Con respecto a la prueba (art. 3 transitorio de la ley 19.047

La nueva ley otorga la posibilidad de rectificar la prueba rendida, tanto en el sumario como en el plenario, por la vía de la retractación del procesado, cuando su confesión hubiese adolecido de cualquier vicio. Debe tenerse presente que este es un derecho que puede ejercerse en cualquier caso y en cualquier estado de la causa.

El Juez o el Ministro de Corte en su caso, tendrá la obligación de ponderar la nueva declaración con el resto de las probanzas objetivamente válidas del proceso.

Para acoger o rechazar la nueva declaración del procesado, el Tribunal, podrá recurrir a las diligencias que consulta el art. 7 del Código de Procedimiento Penal y, a cualquier otra que conduzca a corroborar o descartar la nueva declaración.

A mayor abundamiento, el art. 5 de la nueva Ley en su N° 8 agrega un inciso final al art. 323 del Código de Procedimiento Penal, por el cual se impone al Juez, la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para cerciorarse que el encausado no haya sido objeto de tortura o amenaza.

2.- Respecto de la libertad provisional bajo fianza (art. 5 permanente, N° 9 a 12 de la Ley 19.047

La nueva ley acentúa el carácter de derecho constitucional que tienen los procesados a la libertad provisional de todo detenido o preso. De acuerdo a este criterio el Juez estará obligado a otorgar este beneficio, a menos que antecedentes calificados del proceso lo impida, lo que deberá establecerse expresamente en resolución fundada. Más aún, esta fundamentación debe apoyarse en diligencias precisas y determinadas de la investigación, cuando se invoquen trámites pendientes o en antecedentes calificados del proceso, cuando se invoque el peligro para la sociedad o para la víctima.

Las nuevas disposiciones sobre el rigor de la fundamentación que invoque el Juez para denegar este beneficio resultan claramente ratificadas por la eliminación del inciso 2° del artículo 364 del Código de Procedimiento Penal.

3.- En cuanto a la prosecución de la tramitación en los tribunales ordinarios (art. 1 transitorio, inciso 5, 10 y 11; y art. 4 transitorio de la Ley 19.047

El Juez o la Corte podrán abrir un nuevo término probatorio, el que no excederá de 30 días, si se estimare insuficiente o dudosa la prueba rendida.

En todo caso, el Tribunal Ordinario deberá cerrar el sumario en el plazo máximo de 45 días, término prorrogable por igual período y por una sola vez, previa autorización de la Corte Suprema.

Debe tenerse presente que el Tribunal de Primera Instancia, tanto respecto a los Ministros en Visita extraordinaria, como de los jueces del crimen, será siempre la Corte de Apelaciones respectiva.

Si estos procesos que pasaron a ser de conocimiento de la Justicia Ordinaria, llegaren a la Corte Suprema, ésta deberá funcionar en la forma ordinaria que establece el art. 93 del Código Orgánico de Tribunales, es decir, en ningún caso se integrará con el Auditor General del Ejército.

Todas estas causas gozarán siempre de preferencia para su vista y fallo.

VIII. MODIFICACIONES A LAS NORMAS SOBRE BENEFICIOS ALTERNATIVOS A LAS PENAS CORPORALES (LEY 18.216) INTRODUCIDAS POR LAS "LEYES CUMPLIDO" (INDULTOS Y BENEFICIOS CARCELARIOS)

Artículo 5° Transitorio

En virtud de esta norma transitoria se permite la concesión judicial de los beneficios de la libertad vigilada y la reclusión nocturna (se excluye a la remisión condicional de la pena) a los que resulten condenados en los procesos traspasados a la Justicia Ordinaria cualquiera que haya sido la cuantía de la pena privativa o restrictiva de la libertad que se imponga en la sentencia.

El ámbito de aplicación de esta norma transitoria está referido sólo a "las causas comprendidas en el artículo primero transitorio", es decir, sólo es aplicable a las causas cuyo conocimiento, en virtud de dicha norma, sea traspasado desde la Justicia Militar a la Justicia Ordinaria.

De acuerdo a esta norma el Juez prescindirá de la exigencia de satisfacción previa de las indemnizaciones civiles, costos y multas impuestas por la sentencia.

Además, en caso de concederse el beneficio de la libertad vigilada, "el plazo de tratamiento y observación será igual al de duración de la pena".

Artículo 6° Transitorio

En virtud de esta norma se introduce una modificación transitoria a la Ley 18.216 en lo que se refiere a las exigencias actualmente señaladas en sus artículos 4° letra a), 8° letra a) y 15° letra a).

El sentido de esta norma es tornar transitoriamente aplicables los beneficios de la remisión condicional de la pena, de la libertad vigilada y de la reclusión nocturna a casos que hoy estaban impedidos de optar a ellos. Para ello esta norma transitoria no atiende a la cuantía de la pena impuesta en la sentencia -como es el criterio del texto permanente de la ley 18.216-, sino que se adopta el criterio de atender al tiempo de pena que falta por cumplir.

La aplicación de esta norma es de carácter general (a diferencia del artículo 5° transitorio), siendo aplicable en favor de " todos los reos que esten cumpliendo actualmente condenas o se encuentren actualmente procesados. Entendiéndose por tales los que lo sean a la época de la publicación de estas normas.

En virtud de esta norma transitoria de la Ley 18.216 para la concesión judicial del beneficio de la remisión condicional de la pena se exige que el lapso incumplido de pena impuesta por la sentencia no exceda de un año; igual plazo incumplido se exige en el caso de la reclusión nocturna. En el caso de la libertad vigilada se exige que tal lapso incumplido de pena sea superior a tres años y no exceda de cinco.

Además se deberán cumplir las demás exigencias que regula la Ley 18.216 en sus disposiciones permanentes, a diferencia de lo que ocurre con el beneficio regulado en el artículo 5° Transitorio.

Respecto de la situación que nos preocupa, esto es, la de los presos políticos, ya sea que se encuentren actualmente en prisión o en libertad provisional, rebeldes o fugados, será preciso estudiar muy detalladamente cuál de las dos normas transitorias antes analizadas les resulta más favorable, ya que ambas, en principio les son aplicables.

Incluso van a presentarse casos en que las normas permanentes de la Ley 18.216 (transitoriamente modificadas por este artículo 6° transitorio) resulten más favorables para ellos. En tal caso no

vemos obstáculo para que tales normas permanentes les sean aplicables, en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 del Código Penal sobre la aplicación del principio pro-reo.

En conclusión, en lo que respecta a los beneficios judiciales alternativos a las penas corporales aplicables en normas transitorias antes analizadas, existirán tres regímenes aplicables, a saber:

1. El que consagran las normas permanentes de la Ley 18.216;
2. El que consagran las normas transitorias de la Ley 118.216 en virtud de lo dispuesto en el artículo 6° transitorio antes analizado; y
3. El que consagra el artículo 5° transitorio antes visto.

Deberá, en consecuencia, examinarse atentamente, caso á caso, cuál de estos tres regímenes resulta más favorable para nuestros defendidos.

VII. ANALISIS DE OTRAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 8° Transitorio

Esta disposición señala que para los efectos del artículo 509 del Código de Procedimiento Penal se considerarán como delitos de la misma especie las infracciones a las leyes N° 17798, sobre Control de Armas, y 12.927, sobre Seguridad Interior del Estado cometidos por una misma persona entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

El tenor de la norma es claro y no admite mayores comentarios. Sólo creemos conveniente señalar que, atendido su claro tenor literal, esta norma transitoria es aplicable a las causas que a la fecha de publicación de la ley se encuentren afinadas, por aplicación del artículo 18 del Código Penal.